

Reflexiones y propuestas para el análisis de impacto de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.

Beatriz Tovar Guerrero¹.

En el mes de abril del año 2023 el Senado de la República aprobó con 63 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.

Lo anterior implica la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual, esto incluye violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

La reforma constitucional anteriormente señalada es fruto de esfuerzos colectivos entre diversos grupos de la sociedad, particularmente del impulso de las mujeres en la exigencia del respeto a sus derechos y dignidad en todos los espacios.

Los logros en textos normativos, constituciones y tratados es trascendental y ha llevado años justamente a diversos grupos discriminados históricamente lograrlo, pero ello no es suficiente y es necesaria la transición a sustantiva de la aplicación normativa que sea suficiente ante la realidad fáctica a la que nos enfrentamos.

¹ Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, egresada del doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac, campus Querétaro. Maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato

El presente trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre la necesidad de evaluar el impacto de las reformas en el acceso de mujeres al libre ejercicio de sus cargos de elección popular, así como la propuesta de una serie de indicadores para realizar esta evaluación.

Hace 68 años, por primera vez en la vida política de nuestro país, las mujeres pudieron participar en las elecciones federales, resultado de luchas y exigencias en México y otros países como referentes, esto abrió el espacio y marcaría un punto de no retorno hacia la paulatina pugna por una participación política en igualdad de condiciones; múltiples reformas y leyes se añadieron al marco jurídico mexicano para tratar de hacerlo una realidad, sin embargo, todas aquellas que decidieron incursionar en la vida política se encontraron con diversas barreras en mayor o menor medida que impidieron e impiden hoy en día el desempeño de sus cargos libres de violencia de cualquier tipo.

Existen diversos tipos de violencias hacia las mujeres e incluso pueden darse de manera múltiple y combinarse entre ellas, particularmente la violencia política en razón de género hace referencia a *“cualquier tipo de violencia física o psicológica que ejercen los responsables de partidos y otros actores políticos en contra de las mujeres, con el fin de obstaculizar su presencia en la vida pública”* (Guadarrama y Aguilar, 2021). Guadarrama y Aguilar (2021) contemplan cuatro dimensiones en las que se puede manifestar la violencia política contra la mujer: física, psicológica, económica y simbólica.

Se puede trazar una línea de estudio sobre la violencia política contra las mujeres en tiempos más recientes, pero este fenómeno no se limita a una región o una temporalidad, sino que se encuentra presente a lo largo de la historia, habiendo diferentes posibles explicaciones de este fenómeno, como que se trate de una derivación de la violencia contra la mujer, manifestándose ahora en el escenario político. Lo que queda claro, es que los casos de violencia política contra la mujer se han visibilizado más en tiempos recientes, derivado de una mayor apertura de estos espacios en el poder para las mujeres, comenzando con la legalidad del voto para las mujeres a lo largo del mundo a partir del siglo XX. Esta visibilización del problema, es gracias a las denuncias emitidas por las mujeres dentro del espacio político que la han experimentado (Guadarrama y Aguilar, 2021).

La violencia política en razón de género se encuentra en un espacio legal poco sancionable, por lo menos hasta hace poco, dada a la presencia del entendimiento de los roles de género dentro de los espacios institucionales, causando una preferencia hacia el género masculino y a una dificultad mayor para la mujer para incursionar en estos espacios (Guadarrama y Aguilar, 2021).

Para la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2007), se pronunció que la paridad es uno de los principales determinantes de la democracia, buscando la igualdad dentro del poder y la toma de decisiones, contemplando tanto la ocupación de espacios dentro de la política, como la participación ciudadana.

1. La ley 3 de 3 en el tiempo.

En México, la violencia política en razón de género es un problema grave que afecta a las mujeres en el ejercicio de su cargo público. En 2022, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) reportó que el 66% de las México ha sufrido algún tipo de violencia.

En el mismo año, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que el 13% de las mujeres que se postularon a cargos de elección popular en México denunciaron haber sido víctimas de violencia política. Esta cifra representa una reducción del 40% con respecto al año 2021.

La Ley 3 de 3 contra la violencia política en razón de género fue aprobada en 2020 y entró en vigor finalmente en mayo de 2023, establece que las personas que aspiren a ocupar cargos de elección popular deben acreditar que no tienen antecedentes penales por violencia familiar, violencia contra la mujer o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

La Ley 3 de 3 fue impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para prevenir y erradicar este tipo de violencias. Estas organizaciones argumentaron que la ley era necesaria para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar en la vida política que los hombres.

Por su parte en el marco institucional, particularmente la institución electoral nacional también hizo lo propio.

La elaboración del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres (2016); la modificación al Reglamento de Quejas y Denuncias del INE para incorporar el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género (2017), así como la reforma de abril de 2020 la cual modificó seis Leyes Generales y dos Leyes Federales para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género, en la cual se mandata al Instituto Nacional Electoral a vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género (INE, 2021).

De esta forma es posible constatar el empuje que se le ha dado por atender esta problemática desde distintos espacios e instituciones. La denominada ley 3 de 3 ha sido un hito importante en la lucha contra la violencia política en razón de género en México, se busca que tenga un impacto positivo en la prevención y protección de los derechos de las mujeres en México, ayudando a crear un entorno más equitativo y libre para la participación política de las mujeres.

A continuación, se presenta un breve marco histórico para la creación, aprobación y entrada en vigor.

- 2019: Las organizaciones de la sociedad civil presentan una iniciativa de ley para crear una ley contra la VPMG.
- 2020: El Senado de la República aprueba la Ley 3 de 3.
- 2021: La Cámara de Diputados aprueba la Ley 3 de 3.
- 2023: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de aprobación de la reforma a los artículos 38 y 102 de la

Constitución Política, conocida como “Ley 3 de 3” contra la violencia, luego de que 23 congresos estatales respaldaran los cambios.

2. Situación de la violencia política en razón de género.

El último informe de agosto de 2023 que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), del 14 de abril del 2020 al 14 de agosto del 2023, se han recibido 291 quejas, denuncias o vistas; de las cuales por este motivo.

De acuerdo al informe en mención de las 291 quejas, vistas y/o denuncias, las conductas denunciadas que más se manifiestan son los ataques en redes sociales (94), seguido de la obstaculización en el ejercicio de las funciones (38), y en tercer lugar se presentan los ataques en medios de comunicación con 25 quejas

En concordancia con lo anterior la medida cautelar más solicitada es el retiro, suspensión y/o eliminación de las publicaciones, fotografías, videos, imágenes y/o comentarios realizados en redes sociales, medios de comunicación y/o plataformas digitales, solicitudes que reflejan que, el mayor número de quejas que se reciben se encuentran vinculadas a ataques en redes sociales

Respecto a quienes están ejerciendo estas violencias, el informe nos dice que, de los 659 probables infractores, el 18.4% son personas morales, partidos políticos y medios digitales (121), mientras que el 81.6% son personas físicas (538). Al respecto, 401 hombres han sido denunciados o identificados como probables responsables, siendo el género con mayor índice de denuncias ya que representan el 74.5 % de la totalidad de las personas físicas denunciadas; resaltando que, el 24.5% restante son mujeres (137), lo que evidencia que el hecho de ser del mismo género no es un obstáculo para ejercer violencia.

Un hecho que resulta novedoso en el informe es su atención y detección en el cruce de interseccionalidades y violencias. De las 373 víctimas identificadas, 29 de ellas, presenta una

interseccionalidad con otra categoría sospechosa, siendo que, la comunidad LGBTTIQ+ tiene mayor prevalencia con un 59%.

Actualmente, el INE aporta el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, el cual nos muestra datos de manera pública sobre las sentencias a actores políticos que hayan cometido alguna acción de violencia política en razón de género, como la gravedad del caso, el tipo de sentencia, el órgano que haya dictaminado la sentencia, ámbito territorial, el cargo de la persona sentenciada. Este padrón tiene registro desde 2020, abarcando los procesos electorales de 2020-2021 y 2022-2023.

Actualmente se encuentran registradas 348 personas, de las cuales 304 están sancionadas, el 19% son mujeres y el 81% hombres.

Oaxaca es la entidad con mayor prevalencia de sanciones con un 35.8% de las mismas, por otro lado, el principal cargo que ostentan las personas sancionadas es, en primer lugar, el de la presidencia municipal; en segundo lugar, el ciudadano y en tercer lugar quienes ostentan una regiduría.

El 68% de las denuncias son calificadas como leves y grave ordinaria.

Los datos anteriores son de suma relevancia ya que nos ayudan a identificar, personas, entidades, factores, interseccionalidad en la violencia, tipos de caso entre otros que ayudarán en la toma decisiones y acciones para prevenir y erradicar este tipo de violencia.

3. La importancia de analizar y evaluar el impacto de leyes, programas o estrategias que pretenden erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género.

El análisis y la evaluación del impacto de leyes, programas o estrategias son procesos fundamentales para dilucidar al alcance e impacto de las mismas. Estos procesos permiten a los gobiernos, las organizaciones, los legislativos y a la misma ciudadanía comprender los efectos de las acciones tomadas y si en realidad se han logrado sus objetivos.

La transversalización de la perspectiva de género es "...el proceso de evaluar las consecuencias que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción planeada, incluidas la legislación, las políticas y los programas, en cualquier sector y en todos los niveles. Es una estrategia para hacer de los problemas y experiencias de las mujeres y los hombres una dimensión integral del diseño, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de tal manera que no se perpetúe la desigualdad. El objetivo último es conseguir la igualdad de género". Una estrategia para transversalizar la perspectiva de género puede incluir iniciativas afirmativas dirigidas bien sea a las mujeres o a los hombres (OPS, 2023).

La perspectiva de género es una herramienta que permite comprender las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en la sociedad. Se trata de una mirada crítica que cuestiona los estereotipos y roles de género, y que busca promover la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas.

La planificación y el análisis de leyes, programas o estrategias que pretendan erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género, como uno de sus puntos de partida es un análisis con perspectiva de género y que, en todo momento para la toma de decisiones y diseño políticas, programas y proyectos tengan en cuenta las necesidades, experiencias y vivencias de las mujeres. Estos procesos son importantes para promover la equidad y el acceso a la igualdad sustantiva

La planificación y el análisis con perspectiva de género permite identificar y abordar las desigualdades de género y discriminaciones que enfrentan las mujeres y los hombres en la sociedad. Esto permite diseñar políticas y programas que aborden estas desigualdades y promuevan la igualdad de oportunidades.

La perspectiva de género promueve la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones. Esto contribuye a garantizar que las necesidades y perspectivas de las mujeres sean consideradas en la elaboración de políticas y programas.

La perspectiva de género puede aplicarse en la planificación y el análisis de diferentes maneras. Algunas de las estrategias más comunes incluyen:

- Revisar la información y los datos con perspectiva de género. Esto implica identificar y analizar los sesgos de género en la información y los datos. Por ejemplo, es importante considerar si la información está disponible para mujeres y hombres de manera equitativa, y si refleja las diferentes experiencias y realidades de ambos géneros.
- Incluir la participación de mujeres en la planificación y el análisis. Esto es esencial para garantizar que las necesidades y perspectivas de las mujeres sean consideradas. Las mujeres pueden participar en la planificación y el análisis de diferentes maneras, por ejemplo, a través de consultas, talleres y grupos focales.
- Utilizar indicadores de género. Los indicadores de género son herramientas que permiten medir los avances en la igualdad de género. Los indicadores de género pueden utilizarse para evaluar el impacto de las políticas y programas en las mujeres y los hombres.

Así como los procesos de desarrollo, planeación e implementación son fundamentales desarrollarlos bajo diferentes perspectivas en particular bajo la perspectiva de género. La evaluación de las leyes es un proceso importante que permite determinar si estas están cumpliendo con los objetivos para los que fueron creadas. Este proceso es necesario para garantizar que las leyes sean efectivas.

La evaluación ayuda a identificar que las leyes, proyectos, programas o estrategias que no están funcionando como se esperaba puedan ser reencausadas, sustituidas o derogadas. Esto puede ser debido a que la ley no está bien diseñada, o a que las circunstancias han cambiado desde que la ley fue aprobada.

De igual manera puede ayudar a identificar las leyes que son redundantes o que se solapan con otras leyes. Esto puede generar confusión y duplicar esfuerzos. En estos casos, la evaluación puede proporcionar información para consolidar o eliminar las leyes.

Por otro lado, proporciona elementos para mejorar la comprensión de los efectos de las leyes. Esto puede ser útil para tomar decisiones sobre nuevas leyes o para modificar leyes existentes.

La evaluación de las leyes puede realizarse de diferentes maneras. Una forma común es utilizar encuestas, métricas, entrevistas o grupos focales para recopilar la opinión de los ciudadanos sobre la ley. Otra forma común es analizar datos sobre el cumplimiento de la ley, la aplicación de la ley y los efectos de la ley.

La evaluación de las leyes es un proceso importante que puede ayudar a garantizar que las leyes sean efectivas y que estén beneficiando a la sociedad. Este proceso es necesario para mejorar el Estado de Derecho y para garantizar que las leyes reflejen las necesidades y prioridades de la sociedad.

Actualmente existen diversos datos sobre la violencia política en razón de género, así como múltiples esfuerzos para erradicarla, sin embargo, aún los esfuerzos por analizar los efectos de las acciones no se encuentran en el marco de una agenda consolidada.

4. Propuesta de indicadores para el análisis de impacto de la ley 3 de 3 contra la violencia de género.

Los indicadores cualitativos y cuantitativos son fundamentales para el análisis de impacto y la toma de decisiones porque permiten medir los resultados y el progreso de una intervención o política. Esto es esencial para evaluar su eficacia y para tomar decisiones informadas sobre cómo mejorarla.

Los indicadores pueden utilizarse para medir una amplia gama de resultados, desde objetivos generales hasta indicadores específicos.

Los indicadores también pueden utilizarse para medir el progreso de una intervención de una política a lo largo del tiempo. Esto puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones a identificar áreas que necesitan mejoras a través del tiempo.

Las siguientes dimensiones e indicadores son una propuesta proveniente del análisis de las implicaciones de la violencia política en razón de género y sus principales elementos.

Dimensión	Indicador	Descripción
Acceso a cargos de elección popular	Número de mujeres que se postulan a cargos de elección popular	Este indicador mide el impacto en el aumento de la participación política de las mujeres. Se mide de la siguiente manera
	Número de mujeres que son electas a cargos de elección popular.	Este indicador mide el impacto en la representación política de las mujeres.
Ejercicio del cargo libre de violencia	Número de mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia política.	Este indicador mide el impacto en la reducción de la violencia política en razón de género.
Acceso a la justicia	Número de sentencias condenatorias por violencia política en razón de género	Este indicador permite observar la brecha entre el número de denuncias y el número de sentencias.
	Número de personas sancionadas por violencia política en razón de género	Este indicador permite observar la brecha entre el número de denuncias y el número de personas sancionadas
	Número de conductas calificadas como graves.	Este indicador permite observar la relación entre el número de sentencias

		y la calificación de la conducta.
Resiliencia y transformación	Acciones concientización sobre la violencia política contra las mujeres	Concientización sobre la violencia política en razón de género.
	Acciones de apoyo a las víctimas de violencia política contra las mujeres	Apoyo a las víctimas de violencia política contra las mujeres
	Número de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres	Este indicador mide el impacto la promoción de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género.

Estos indicadores o métricas pueden ser utilizados para evaluar el impacto de la Ley 3 de 3 en diferentes dimensiones, como la participación política, la prevención de la violencia, la sanción de la violencia y la sensibilización sobre la violencia política contra las mujeres.

Los aportes de los anteriores indicadores deben de combinarse con análisis cualitativos y elementos que puedan aportar las personas denunciante, en análisis y detección de constantes en las denuncias, así como la relación de las sentencias y las sanciones.

El efecto esperado por la 3 de 3, es que ninguna persona con antecedentes de violencia pueda ejercer un cargo, empleo o comisión del servicio público, haciendo de estos, espacios libres de violencia y mejores entornos en el desarrollo de los cargos de las mujeres.

Por ello es fundamental seguir analizando la violencia política en razón de género e implementar en colaboración con distintas instituciones, ciudadanía, asociaciones y demás actores estrategias para prevenir y erradicar este tipo de violencia

Referencias y fuentes de información.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2023). CDHCM celebra la entrada en vigor de la Ley 3 de 3 contra la violencia. Boletín No. 70. Consultado el 30 de agosto de 2023. Disponible en <https://cdhcm.org.mx/2023/05/cdhcm-celebra-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-3-de-3-contra-la-violencia/>

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2018). *Violencia política contra las mujeres les obstaculiza ejercer sus derechos políticos. México*. CNDH. Dirección General de Comunicación. Disponible a través de: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Comunicados/2018/Com_2018_166.pdf

Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2007). *Consenso de Quito*. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Guadarrama Sánchez, G. J.; Aguilar Pinto, E. (2021). *Las diversas lecturas del concepto de violencia política en razón de género en México (2010-2020)*. Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración. Revista Convergencia, vol. 28, e14538, 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.29101/crcs.v28i0.14538>

Humphrey Jordan, C. A. (2022). *Presentación*. En *La Reforma en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y su Homologación a Nivel Local: Avances y Desafíos*. México. Instituto Nacional Electoral.

Instituto Electoral Nacional (s.f.). Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. México, Instituto Electoral Nacional. Disponible a través de: <https://ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/>

Instituto Nacional Electoral. (2023). Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). Consultado el 15 de agosto de 2023. Disponible en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/152809/CGor202308-25-ip-7.pdf>

Instituto Nacional Electoral. (2023). Registro Nacional de personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género Contra las Mujeres. Consultado el 1 de septiembre de 2023. Disponible en <https://ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/>

Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2021). El panorama legislativo en torno a la regulación de la violencia política por razones de género como delito, marzo 2021. CNDH de México.

Senado de la República. (2023). Comisión Permanente realiza declaratoria de aprobación de la llamada “Ley 3 de 3” contra la violencia. Consulta el 30 de agosto de 2023. Disponible en <https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comisionp/cp-comunicados/6012-comision-permanente-realiza-declaratoria-de-aprobacion-de-la-llamada-ley-3-de-3-contra-la-violencia>